

VOTO PRISIONERO.

VOTO PRISIONERO.

The prisoner vote.

Madeleine Flores Garcia.¹

SUMARIO: Introducción. I. Antecedentes históricos. II. Sufragio, concepto, naturaleza y características III. Voto activo. IV. Voto pasivo. V. Finalidad del sistema jurídico mexicano. VI. Restricciones para otorgarles el derecho al voto a personas sujetas a proceso. VII. Caso José Gregorio Pedraza Longi. VIII. Derecho comparado. IX. Beneficios de la integración. Conclusiones.

RESUMEN.

Para efectos de este trabajo, iniciaremos con una breve reseña de la evolución que ha tenido el voto, para así continuar con la definición del sufragio y sus tipos.

Posteriormente me enfocaré en defender mi postura acerca de porque es importante que los presos que no tienen sentencia definitiva, se les permita votar y también se les otorgue el voto a aquellos que han sido pre liberados.

Finalizando con los beneficios que traería la participación de los presos en los procesos electorales.

ABSTRACT.

For the purposes of this work, we will begin with a brief overview of the evolution of the vote, in order to continue with the definition of suffrage and its types.

I will then focus on defending my position on why it is important for prisoners who do not have final judgment to be allowed to vote and also to be given the vote to those who have been pre-released.

¹ Estudiante en la Facultad de Derecho UNAM.
madefg13@gmail.com

Ending with the benefits that would bring the participation of the prisoners in the electoral processes.

PALABRAS CLAVE: democracia, voto, voto activo, voto pasivo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presos, derecho, sentencia.

INTRODUCCIÓN.

El derecho al voto es parte del Derecho Electoral, el cual el Doctor Pérez de los Reyes lo define como:

“Conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos-jurídicos que regulan la actividad ciudadana tendente a la renovación periódica de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo en sus distintos ámbitos de competencia.”(Pérez 2010)

A su vez, también se encuentra relacionado con el vocablo “elecciones” el cual es el procedimiento mediante el cual la ciudadanía determina, con su voto, quienes de los candidatos participantes deben ocupar los cargos de elección popular en los tres niveles de poder que integran la República federal mexicana.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, señala que el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política y dicha obligación requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, y al no ser los derechos políticos de carácter absoluto, su restricción debe basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. (ST-JDC- 33/2011)

Las elecciones han sido siempre un medio de legitimación del ejercicio del poder, más no del acceso al poder, y han estado presentes en las diversas etapas históricas de México.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

La evolución de los Derechos políticos en México se dio paulatinamente.

Con la creación de la Constitución de 1824 se obtuvieron considerables avances en los derechos políticos del pueblo, sin embargo, fue hasta 1847 cuando se aprobó el Acta constitutiva y de Reforma de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, que se establecieron las garantías individuales para todos los mexicanos habitantes de la República. Fue por esto que se adoptaron elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y miembros de la Suprema Corte de Justicia. En ese entonces, los requisitos para votar eran principalmente saber leer y escribir, aunque con el paso del tiempo se derogó por considerarlo contrario a los principios democráticos.

Durante el gobierno de Francisco I. Madero, en el México posrevolucionario, en el año de 1911, hubo necesidad de realizar cambios a la legislación electoral, por lo que el 22 de Mayo de 1912, se reformó la Ley Electoral.

El Constituyente de Querétaro al promulgar el 5 de febrero de 1917 la nueva Carta Magna, contempló que el gobierno siguiera siendo republicano, representativo, democrático y federal, también se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a su vez se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección.

A pesar de las diversas modificaciones que ha tenido nuestra Constitución a lo largo de los años, se sigue mantenido la dualidad del sufragio, esto es, como un derecho y una obligación del ciudadano mexicano.

II. SUFRAGIO. CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.

Según la Real Academia de la Lengua Española, el término proviene de la voz latina *suffragium*, y lo define en sentido restringido como:

“Aquel en que tienen derecho a participar todos los ciudadanos, salvo determinadas excepciones”.(RAE)

En el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, se define como:

“El sufragio es, además, un derecho personal, aunque ejercido corporativamente – de carácter funcional, una función, pues a través del mismo se procede a determinar la orientación de la política general, ya sea mediante la designación de los órganos representativos, ya sea mediante la votación de las propuestas que sean sometidas a la consideración del cuerpo electoral.”(CAPEL)

Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que:

“El sufragio es el Derecho político de los ciudadanos de participar en asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Se trata, por tanto, de un derecho público subjetivo de naturaleza política.”

El sufragio encarna tres efectos principales:

1. Producir representación.
2. Obtener gobierno.
3. Ofrecer legitimación.

Respecto a la naturaleza jurídica del sufragio, existen en doctrina cuatro teorías esenciales para calificarlo las cuales son:

1. Sufragio como derecho: se deriva de las teorías de Rousseau sobre el concepto de soberanía popular, entendida ésta como la suma de todas las fracciones de soberanía que corresponde a cada individuo, por lo que, se concluye que al ser el sufragio una manifestación de esa soberanía, es un derecho preestatal e innato a la condición de persona.

2. Sufragio como función: Desarrollada por Sièyes, parte de la concepción que la soberanía pertenece a la Nación como un todo, y no a cada individuo como detentador de una parte de ella, por lo que si el titular de la soberanía es la primera, el poder electoral se atribuye a los ciudadanos sólo como órganos encargados de ejercerlo “cumpliendo una función pública y no ejercitando un derecho.” (Hernández 1990,164)

Dicho en otros términos en esta teoría:

“Son titulares del jus suffragii aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones determinadas por el legislador, que les coloca en una situación objetiva particular: se les pide que participen en la elección de los gobernantes; con ello no ejercen ningún derecho personal, sino que actúan en nombre y por cuenta del Estado, ejercen una función política.” (CAPEL)

3. Sufragio como deber: Esta teoría que algunos tienen como una derivación de la anterior, supone que el sufragio no es un derecho disponible por el individuo, sujeto a su voluntad ejercerlo o no, sino que es un verdadero deber jurídico que se justifica en la necesidad de mantener el funcionamiento armónico de la estructura política estatal.
4. Sufragio como derecho-función: Resulta de una especie de híbrido que además de ver al sufragio como un derecho del ciudadano, también lo conceptualiza como el ejercicio de una función pública obligatoria, de ahí que se analice esta teoría a partir de esa dualidad, y es la que, tanto a nuestro juicio como de la doctrina, impera en nuestra legislación.

En México, el sufragio tiene las características de ser:

1. Universal: se refiere a que todos los ciudadanos tienen el derecho a ejercer su voto. Esto procede sin distinción alguna, ya sea por restricción de género, raza, credo, ideología política, nivel de educación o riqueza.

VOTO PRISIONERO.

2. Libre: significa que el ciudadano pueda decidir por si mismo, la emisión de su voto y, sobre todo, ejercerlo el día de la jornada electoral sin estar sometido a ningún tipo de presión o coacción.
3. Secreto: consiste en que la emisión del mismo se haga con la condición de que ningún ciudadano sepa el sentido del sufragio de los demás ciudadanos. Esto con el fin de que el ciudadano no se sienta presionado por la opinión de los demás respecto a su preferencia electoral.
4. Directo: se refiere a que los candidatos reciben el voto de los ciudadanos sin intermediación alguna de alguien. Es por esto que no existe intermediario entre quien manifiesta su voluntad y la autoridad que lo recibe, ya que se debe proteger la privacidad del mismo.
5. Personal e intransferible: consiste que solamente el titular de ese derecho es quien puede ejercerlo, es decir, es el único que puede acudir a la casilla a emitir su voto.

Todo esto se encuentra consagrado en el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgada el día 23 de mayo de 2014, la cual a la letra dice:

Artículo 7

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.

III. VOTO ACTIVO.

En México, el voto activo es el derecho con el cual se nos reconoce, a los ciudadanos, la capacidad de votar, sin embargo, también es una obligación.

Para tener acceso a este voto es necesario tener dieciocho años cumplidos o más, al día de la elección y ser mexicano; ya sea por nacimiento o por naturalización.

Entendiéndose por ciudadano lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos su artículo 34, que dice:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido 18 años, y
- II. Tener un modo honesto de vivir.

Así como el artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece:

Artículo 9.

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:
 - a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y
 - b) Contar con la credencial para votar.
2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.

IV. VOTO PASIVO.

El derecho de voto pasivo, se refiere al derecho de cualquier ciudadano a participar como candidato a algún puesto de elección popular, recibiendo en su favor el voto de los demás ciudadanos.

Para el ejercicio del derecho pasivo al voto, los ciudadanos tienen dos opciones:

1. Ser propuestos como candidatos través de un partido político,
2. Postularse como candidato independiente, esto es, sin el respaldo de algún partido político.

Existen algunos requisitos para ser acreedor del voto pasivo, y éstos dependen del cargo para el cual estén propuestos, por ejemplo: la edad mínima requerida para ser diputado es veintiún años, para senador son veinticinco años y para presidente treinta y cinco. Sin embargo, estos no son los únicos requisitos, existen más y están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 55, 58, 82 y 83, así como en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V. FINALIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

El sistema jurídico mexicano tiene como finalidad la tutela de los derechos políticos, el cual, ha pasado por diversas etapas a lo largo de los años.

- La primera se remonta a la época de la Constitución de 1857, con la inclusión a nivel constitucional del juicio de amparo el cual tenía como finalidad salvaguardar los derechos políticos.
- Para el año de 1996 hubo una reforma constitucional, de la cual surgió el llamado “juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano”.
- Y como última etapa tenemos la reforma Constitucional del 10 de Junio de 2011 la cual señala que los derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Mexico, son elementos de validez supremos.

Sin embargo, estas reformas no han tenido una trascendencia tan exitosa, ya que se siguen presentando restricciones y suspensiones en el ejercicio de los derechos políticos, así como la conservación del principio pro persona.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 38 establece los límites para que los derechos políticos electorales de los ciudadanos sean suspendidos, el cual a la letra dice:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

- I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley;
- II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
- III. Durante la extinción de una pena corporal;
- IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;
- V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y
- VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Además existen algunos criterios jurisprudenciales que han sido sostenidos por las Salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las cuales se han contrapuesto con algunos criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia penal, ya que estos últimos se enfocan a aplicar la norma que mejor favorezca el ejercicio del derecho, tal como lo dispone el artículo 46 del Código Penal Federal, que a la letra dice:

Artículo 46.- La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o

representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.

Posponer la suspensión de los derechos políticos de un ciudadano hasta que tenga sentencia, garantiza el principio pro persona porque favorece de forma alguna a aquellas personas que están privadas de su libertad, pero sin haber recibido sentencia aún.

VI. RESTRICCIONES PARA OTORGARLES EL DERECHO AL VOTO A PERSONAS SUJETAS A PROCESO.

De conformidad con el artículo 46 del Código Penal Federal y con las jurisprudencias, se puede concluir que la suspensión de derechos se materializa hasta que la pena se ha cumplimentado en su totalidad, esto tratándose de sentencias que han causado estado.²

² Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Tercera Parte.- Históricas Segunda Sección- TCC, p. 3136 Derechos políticos, suspensión de. El artículo 46 del Código Penal Federal amplía la garantía constitucional que prevé la fracción ii del ordinal 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [tesis histórica]. Es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última disposición, establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad contado desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que recordar que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma secundaria es más benéfica, ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el legislador ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación penal federal, al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria, de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulnera en perjuicio del titular del derecho público subjetivo, las garantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 constitucionales.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1020/2005.—16 de junio de 2005.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.—Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.

Amparo en revisión 1570/2005.—19 de septiembre de 2005.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.—Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda.

Amparo en revisión 1470/2005.—30 de septiembre de 2005.—Unanimidad de votos.— Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.—Secretaria: Ma. del Carmen Rojas Letechipia.

Amparo en revisión 70/2006.—28 de febrero de 2006.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.—Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.

Amparo en revisión 480/2006.—11 de abril de 2006.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.—Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1525, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.10o.P. J/8; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1526.

El tratadista Manuel Gonzales Oropeza señala que las limitaciones en el supuesto del derecho al voto a los sentenciados deben tener tres características fundamentales; es decir, deben ser razonables, proporcionales y constitucionales.(Gonzales 2018)

Razonables se refiere a que deben de contener las limitaciones a los derechos políticos, implica que la medida no debe transgredir derechos humanos trascendentales, como el derecho al sufragio universal o la dignidad humana.(Carrasco 1984, 39)

Es por esto que es necesario clasificar y determinar, para así, de esta manera lograr determinar qué tipos de actos, con base en su gravedad ameritan una suspensión y cuales no.

Es importante que esta clasificación cuente con dos aspectos importantes:

- 1) Fomentar los objetivos que toda sociedad democrática pretende cumplir.
- 2) Evitar la arbitrariedad de las autoridades del Estado.

Es por ello que es necesario que las restricciones contengan una justificación racional.

1. Al decir que deben estar sujetas al principio de proporcionalidad (Sanchez 2011) se refiere específicamente a que debe de cumplir ciertas características, como lo es:
 - i. Que la medida o pena que se haya previsto para tal o cual situación, sea lo más apegado a el fin previamente determinado.
 - ii. Que el juzgador castigue aquellos actos que hayan afectado sensiblemente la esfera jurídica de una persona , agotando todas las exigencias de la justicia y prevaleciendo el criterio de elegir la pena menos gravosa al sentenciado.
 - iii. Que exista una proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el juez o el legislador, tienen la exigencia de llevar a cabo una ponderación respecto a

Nota: Histórica en virtud de que fue abandonada por la tesis 1a./J. 171/2007, de rubro: Derechos políticos. Deben declararse suspendidos desde el dictado del auto de formal prisión, en términos del artículo 38, fracción ii, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1002040. 421 (H). Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Tercera Parte – Históricas Segunda Sección - TCC, Pág. 3136.

la medida que pretende implementar, tomando en consideración la gravedad de la falta y los alcances de dicha medida.(Bernal 2007, 692)

2. Constitucionales. Este se refiere a que todo debe adecuarse al contenido constitucional.

Por ello es fundamental que para determinar las restricciones se basen en el principio *pro persona* (Pinto 2018) y de presunción de inocencia. (Soberanes 2008) De lo contrario se estaría prejuzgando sobre la culpabilidad o no del procesado y de esta manera se vería coartado totalmente su derecho a la presunción de inocencia.

Respecto a este tema se ha pronunciado la Corte Europea y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales han determinado que una persona que no ha sido juzgada de forma definitiva sigue siendo y debe ser considerada como inocente, por lo que la suspensión de derechos no resulta aplicable, ya que es accesoria a la condición de libertad que una persona tenga.

VII. CASO JOSE GREGORIO PEDRAZA LONGI.

El ciudadano José Gregorio Pedraza Longi acudió el once de diciembre de dos mil seis a un módulo de atención ciudadana en el estado de Puebla, para solicitar su inscripción al Padrón Electoral, y con ello poder obtener la credencial para votar.

Sin embargo, su solicitud fue negada debido a la situación judicial en la que se encontraba. Por lo que decidió interponer un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales.

Por auto del veintitrés de febrero de dos mil siete, el Magistrado Presidente, turnó el expediente SUP-JDC-85/2007 a la Magistrada Maria del Carmen Alanís Figueroa.

Después del análisis a algunas normas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llegó a la conclusión de que no había impedimento legal suficiente que le impidiera al ciudadano obtener su credencial con fotografía.

Esto porque se analizó, entre muchos artículos, el 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual determina que todos los ciudadanos gozarán de los derechos políticos. En el sentido que mientras no esté privado de la libertad, debe permitírsele ejercer el derecho a votar.

VIII. DERECHO COMPARADO.

En este apartado veremos cómo algunos países, les otorgan el derecho-obligación de votar, a aquellas personas que están presas, pero que no tiene una sentencia firme aún.

Según un estudio realizado, en dieciocho países los presos están autorizados a votar sin ninguna restricción.

- Países que permiten votar a los presos.

Albania	Alemania	Azerbaiyán	Croacia	Dinamarca	Macedonia
Finlandia	Islandia	Lituania	Moldavia	República Checa	Países Bajos
Portugal	Montenegro	Eslovenia	Suecia	Suiza	Ucrania

Sin embargo, también existen países en los que todos los presos se encuentran condenados a la prohibición de votar o están imposibilitados para hacerlo.

- Países que no permiten votar a los presos.

Armenia	Bélgica ³	Bulgaria
Chipre	Estonia	Georgia
Hungría	Irlanda	Reino Unido
Rusia	Serbia	Eslovaquia ⁴
Turquía		

Y en otros países el Derecho de voto de los presos puede estar limitado de alguna manera.

- Países donde el voto está limitado.

³ La privación del derecho de voto puede prolongarse hasta el fin de la reclusión.

⁴ No hay prohibición pero nada permite a los presos votar.

VOTO PRISIONERO.

Austria	Bosnia-Herzegovina	España	Francia
Grecia	Italia	Luxemburgo	Malta
Noruega	Polonia	Rumania	

- Austria.

El derecho de voto se prohíbe a los presos condenados a una pena de más de un año que hayan obrado de manera intencionada.

- Bosnia-Herzegovina.

Las restricciones al derecho de voto se aplican a los presos acusados de graves violaciones del derecho internacional o inculcados por un tribunal internacional.

- Francia.

Los presos pueden votar si el tribunal les concede el derecho.

- Grecia.

Las restricciones se aplican a los presos condenados a penas superiores a diez años; los condenados a cadena perpetua son privados definitivamente del derecho de voto.

Para las penas comprendidas entre un año y diez, los tribunales pueden limitar el derecho de voto por un periodo de un a cinco años si el comportamiento demuestra perversidad moral.

- Italia.

Los autores de delitos graves y los quebrados condenados a una pena de cinco años o más pierden automáticamente el derecho de voto, mientras que los autores de infracciones menores excluidos de la función pública pierden, o no, el derecho al voto según la decisión del juez.

- Luxemburgo.

Salvo si la supresión de derechos políticos forma parte de la pena impuesta por el juez.

- Malta.

Los condenados por una infracción grave pierden el derecho de voto.

- Noruega.

El derecho de voto puede ser suprimido por un tribunal, aunque sea muy raro y puede limitarse a los casos de traición y de atentado a la seguridad nacional.

- Polonia.

Los presos condenados a una pena de tres años o más cuando la infracción es “reprochable” pueden ser privadas del derecho de voto.

- Argentina.

En este país también estaba prohibido el voto a las personas que se encontraban reclutadas en las cárceles, sin embargo, gracias al Decreto 1291/06 firmado por el ahora ex presidente Néstor Kirchner se reglamentó el artículo 3bis del Código Electoral Nacional que permite el voto de los presos sin condena.

- Costa Rica.

La Constitución vigente en Costa Rica desde 1949, entiende por ciudadanía el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los nacionales mayores de dieciocho años (art. 90). Ese status jurídico, que naturalmente incluye el derecho al sufragio activo, sólo se suspende por “interdicción judicialmente declarada” y por “sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos” (art. 91).

De dichas reglas constitucionales se desprende el principio según el cual los costarricenses mayores de edad comprendidos dentro de la población penitenciaria gozan del derecho a votar, salvo los declarados judicialmente en estado de interdicción⁵ y los condenados cuya sentencia imponga de manera específica la indicada pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. Tal principio diferencia a Costa Rica de otros países de Latinoamérica, cuya tendencia

⁵ Una declaratoria de esa naturaleza debe estar precedida del procedimiento contemplado en los artículos 847 y siguientes del Código Procesal Civil.

es de negarlo de pleno derecho a los que estén purgando pena de prisión e, incluso, a todo el que se encuentre detenido aunque esté pendiente su juzgamiento.⁶

Esa concepción favorable al ejercicio del sufragio por parte de los privados de libertad se refuerza por la circunstancia de que el Código Penal costarricense prevé la privación de dicho derecho como pena aplicable en muy pocos supuestos delictivos.⁷

- Ecuador.

En este país las personas en prisión preventiva tienen la obligación de votar, mientras que las que cumplen condena carecen del derecho al voto, según la Constitución que los rige.

- Irlanda.

En este país se les otorgó el derecho al voto a los presos o a partir del año 2007, en el cual se estableció el procedimiento, consistente en que, cada votante detenido se le dará una boleta del distrito correspondiente en la que deberá marcar la lista elegida.

El sistema funcionará de forma tal que el voto de los reclusos se mantenga en secreto para el personal penitenciario. Los presos votarán según su último lugar de residencia y las mesas electorales funcionarán en los establecimientos penitenciarios y no en las comisarías. Y las autoridades de los comicios serán los funcionarios de las cárceles.

⁶Respecto del primer supuesto, Manuel Aragón Reyes menciona los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; y, en relación con el segundo, a Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay (Aragón Reyes, 1988: 109). En relación con esta última mención que se hace de la República Argentina, cabe sin embargo aclarar que su Corte Suprema de Justicia, mediante fallo adoptado el 9 de abril del 2004, declaró inconstitucional la norma contenida en el artículo 3o del Código Electoral Nacional, que excluía del padrón electoral a los “detenidos por orden del juez competente mientras no recuperen su libertad” (citado por Ardón Acuña, 2004: 19).

⁷ Esa posibilidad excepcional está contemplada, por ejemplo, cuando se trate de delitos contra la autoridad pública, la administración de justicia o los deberes de la función pública y su autor fuere empleado o funcionario público, en cuyo caso quedan los jueces facultados para imponer como pena accesoria las de inhabilitación absoluta o especial en tanto lo estimen pertinente, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites fijados para esa pena (art. 358 del Código Penal). Conviene aclarar que, dentro de las consecuencias de una inhabilitación absoluta, está prevista la “Privación de los derechos políticos activos y pasivos” por un lapso de seis meses a doce años (art. 57.3) y que la inhabilitación especial consiste en la restricción de uno o más de los derechos o funciones contempladas en la absoluta (art. 58).

Además, los presos deberán contar con información previa de los distintos candidatos, la cual podrá adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país. (Pagina12 2018)

En algunos de estos países se instalan mesas en las prisiones, en la cual, personal autorizado recaba los votos, sin embargo, en otros países los presos votan por correo tradicional y su voto es custodiado por el gobierno.

En Mexico se podría ejercer el voto por correo tradicional tal y como lo hacen las personas que viven en el extranjero. Y que esto garantizaría su derecho al voto y de alguna manera beneficiaría su pronta reinserción social.

IX. BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN.

El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que:

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Las elecciones enfatizan que todos somos miembros de una comunidad, trabajando para un bien común, y que tenemos vínculos sociales. La votación representa una forma de crear y mantener esos vínculos. Por lo tanto, psicológicamente y socialmente, el derecho

a voto podría permitir a los presos percibirse a sí mismos como útiles, responsables, confiables y como ciudadanos respetuosos de la ley.

La privación del sufragio, sin embargo, sirve para aumentar la distancia social entre el delincuente y la comunidad, y reafirma sus sentimientos de alienación y aislamiento. Lo que puede impedir, la aceptación y el respeto de las normas sociales.

CONCLUSIONES.

De todo lo anterior podemos concluir que el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política y dicha obligación requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, y al no ser los Derechos políticos de carácter absoluto, su restricción debe basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo.

1. La democracia se fundamenta en el derecho al voto, que es la expresión de la voluntad del pueblo, siempre y cuando ésta sea libremente expresada.
2. Por otro lado, el derecho al voto está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23), entre otros tratados internacionales de los que México forma parte, por lo que se le clasifica como un derecho humano.
3. Se considera que la suspensión de los Derechos Políticos Electorales del actor es innecesaria y desproporcionada si se atiende a la finalidad del régimen de derecho previsto constitucional basado en la readaptación social del individuo, pues al no haberse establecido como pena principal en la sentencia condenatoria, no existe una necesidad imperiosa que justifique el mantenimiento de la suspensión de derechos políticos-electorales cuando se ha sustituido la pena de prisión con el

VOTO PRISIONERO.

régimen de pre liberación, que no incluye alguna forma de reclusión, máxime si con la rehabilitación de sus derechos se facilita su readaptación social.

4. La privación del voto socava el objetivo rehabilitador de desarrollar la personalidad de los delincuentes y reinsertarlos a la sociedad en cuanto ella puede reducir la autoestima de los delincuentes y alienarlos a la comunidad.
5. En cuanto a los presos, considero que es importante destacar que es e diario que se les respeten sus derechos políticos, mientras no exista una sentencia en su contra.
6. La restricción de sus derechos debe de ser proporcional al grado de afectación que haya producido el individuo a la esfera jurídica de una persona o de la sociedad por su conducta ilícita.
7. Considero que es necesario determinar cuáles delitos, por su trascendencia y/o afectación serán acreedores de la suspensión, tomando en cuenta que aquellos que no se consideren graves o que en su defecto, tengan una sanción mínima, sean aquellos a los que se les siga respetando su derecho hasta que no exista sentencia y aunque se encuentren las personas sometidas a un proceso.

FUENTES DE CONSULTA.

- Armendiz, José Luis. El Derecho al sufragio pasivo en la Legislación Electoral mexicana. Disponible en <https://pradpi.es/cuadernos/4/Jose-Luis-Armendariz-Gonzalez.pdf> (Consultado el 25 de Agosto de 2018)
- Bernal Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/24748.pdf> (Consultado el 09 de Agosto de 2018)

- Carrasco, Ángel. El juicio de razonabilidad en la justicia constitucional. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/249823.pdf> (Consultado el 07 de Agosto de 2018)
- Centro Asesoría y Promoción Electoral CAPEL. Diccionario Electoral. Disponible en <https://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html> (Consultado el 28 de Agosto de 2018).
- Dhami, Mandeep. La política de una privación del sufragio a los presos: ¿una amenaza para la democracia. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502009000200007 (Consultado el 24 de Agosto de 2018)
- Franco, Juan José. El derecho humano al voto. Disponible en <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Derecho-Voto.pdf> (Consultado el 24 de Agosto de 2018).
- González Manuel. La suspensión de los derechos políticos por cuestiones penales en México. Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3031/11.pdf> (Consultado el 13 de Agosto de 2018)
- González, Manuel y del Rosario, Marcos. El Derecho a votar de las personas procesadas o sentenciadas por una pena privativa de la libertad. Análisis de la Razonabilidad, proporcionalidad y constitucionalidad de la limitación al ejercicio del derecho art y la prevalencia de la presunción de inocencia y el principio pro persona. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/download/10054/12082> (Consultado el 02 de Agosto de 2018).
- Hernández , Rubén. Los principios del Derecho Electoral. Disponible en <https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1994-01-004-025.pdf> (Consultado el 12 de Agosto de 2018).

- Márquez, Antonio. Mundos aparte: Las leyes sobre suspensión del derecho al sufragio en las Cortes Supremas. Disponible en: http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/ponencias/alec_ewald.pdf (Consultado el 24 de Agosto de 2018).
- Miranda, Adrián Joaquín. El sufragio en México. Su obligatoriedad. Disponible en <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/34/drl/drl6.pdf>. (Consultado el 15 de Agosto de 2018).
- Ojesto Martínez, José Fernando . Juicio para la protección de los Derechos político-electorales del ciudadano. Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/16.pdf> (Consultado el 07 de Agosto de 2018).
- Pérez, Marco Antonio. Evolución del Derecho Electoral en Mexico, de la época prehispánica a la Constitución de 1857. Disponible en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29595/26718> (Consultado el 02 de Agosto de 2018).
- Pinto, Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los Derechos Humanos. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf> (Consultado el 13 de Agosto de 2018)
- Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «sufragio». Diccionario de la lengua española (23.^a edición). Disponible en <http://dle.rae.es/?w=diccionario> (Consultado el 28 de Agosto de 2018).
- Sánchez, Rubén. Recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad en México. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones->

[constitucionales/article/view/5893/7830](#) (Consultado el 12 de Agosto de 2018).

- Soberanes, José María. Los ámbitos de aplicación del principio de presunción de inocencia. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5855/7756> (Consultado el 11 de Agosto de 2018)
- SUP-JDC-85/2007. Actor Jose Gregorio Pedraza Longi. Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de su Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/coleccionessentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00085-2007.htm> (Consultado el 26 de Agosto de 2018)
- ST-JDC- 33/2011. Actor Juvenal Ortiz Zavala. Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral por conducto del Vocal respectivo de la 32 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México . Disponible en <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/ST-JDC-0033-2011.pdf> (Consultado el 15de Agosto de 2018).
- Valls, Sergio Armando. Reflexiones sobre la interpretación de la SCJN respecto de la restricción del derecho político a votar establecida en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/justicia-electoral/article/viewFile/12198/11003> (Consultado el 18 de Agosto de 2018).